



Declaración de Nicosia de la CES: Un llamamiento urgente a los líderes europeos

Adoptada en la reunión del Comité Ejecutivo de 10-11 marzo 2026

Europa se enfrenta a la prueba de la guerra en nuestro continente, a la creciente inestabilidad mundial y a la creciente presión económica y política tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

El aumento de las tensiones internacionales, el incremento de los conflictos, la crisis climática, la escalada de la inestabilidad comercial y económica, y la creciente presión sobre los valores democráticos y la coexistencia pacífica entre personas y países exigen una respuesta europea clara, unida y decisiva, que sitúe el progreso social y económico en el centro y que esté respaldada por el impulso inversor necesario para hacer realidad ese progreso.

En toda Europa, la pérdida de puestos de trabajo y los procesos de reestructuración ya están en marcha en diversos sectores de la economía. Si bien la Comisión Europea estima que Europa ha perdido 27.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero cada mes durante los últimos dos años, la inseguridad laboral se extiende mucho más allá de este sector. Los retos en materia de empleo también son visibles en algunas partes del sector servicios, debido a la ralentización de la actividad. Aunque el mercado laboral en general sigue siendo resiliente y se están creando nuevos puestos de trabajo, estos ofrecen salarios más bajos y peores condiciones que los que se han perdido. Al mismo tiempo, se registra escasez de personal en otros sectores debido a la inseguridad de las condiciones de trabajo, como la falta de más de 1,2 millones de trabajadoras y trabajadores sanitarios, lo que socava la resiliencia y la preparación de Europa. Esto refleja una tendencia más amplia y profunda de inseguridad para las personas trabajadoras en toda la economía, agravada por el deterioro de la calidad del empleo, la presión a la baja sobre los salarios y las condiciones y la proliferación de condiciones de trabajo precarias. La presión se siente en todas las generaciones, con consecuencias a largo plazo para quienes se incorporan al mercado laboral y construyen su futuro.

Ante estos retos, los sindicatos de toda Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, se mantienen firmes y unidos para pedir a los líderes europeos que tomen medidas urgentes para proteger y desarrollar el modelo social y económico europeo.

El bienestar de sus pueblos debe ser el eje central de la cooperación europea. El objetivo debe ser claro: pleno empleo, puestos de trabajo de calidad y progreso social



en una economía social de mercado altamente competitiva.

Un problema real no puede justificar una respuesta errónea

Europa no debe responder a los retos actuales volviendo a las recetas fallidas de la desregulación y la austeridad. El actual impulso a la desregulación bajo la bandera de la «competitividad» no es una solución, sino una amenaza directa para los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la salud y las normas sociales. La CES rechaza firmemente esta agenda de desregulación y cualquier intento de debilitar la negociación colectiva y los convenios colectivos, el diálogo social o los derechos de las y los trabajadores y los sindicatos. El principio de no regresión en los derechos y normas laborales debe garantizarse en todas las iniciativas de la UE.

Europa no se fortalecerá reduciendo los derechos laborales, desmantelando las protecciones sociales y laborales, aumentando la competencia fiscal entre los Estados miembros o debilitando las normas medioambientales con el falso pretexto de la simplificación. Ninguna propuesta de desregulación, ningún debilitamiento de las estructuras de negociación colectiva y ninguna erosión de la democracia en el trabajo y de la representación de las personas trabajadoras en los consejos de administración reforzarán la competitividad de Europa, sino que, por el contrario, socavarán nuestra autonomía. Al contrario, la ventaja competitiva de Europa reside en su modelo social, que protege a los trabajadores y trabajadoras al tiempo que fomenta la innovación, la formación y las relaciones laborales justas.

Seguir erosionando las normas con el pretexto de la desregulación y la competitividad no solo es erróneo en sí mismo, sino que también es políticamente miope. Las propuestas Ómnibus también han contribuido a la alineación entre los actores conservadores y de extrema derecha y han llevado a fuertes divisiones políticas dentro y entre las fuerzas democráticas, lo que socava el apoyo a las iniciativas tan necesarias para reforzar Europa. Además, un programa de desregulación ampliará la brecha entre la UE y su ciudadanía.

Lo mismo se aplica al régimen 28 propuesto. Los sindicatos se opondrán a cualquier intento de eludir o socavar la legislación laboral, los derechos sindicales y de las personas trabajadoras, la negociación colectiva o los derechos de información, consulta y participación, así como las obligaciones en materia de seguridad social, medio ambiente o fiscalidad. Europa debe poner fin a las empresas fantasma y a las construcciones ficticias, en lugar de crear regímenes que favorezcan su proliferación. Esto obstaculizará la innovación y socavará la protección de las y los trabajadores. No debe volver a adoptarse un enfoque al estilo Bolkestein que enfrente a las personas trabajadoras y a los Estados miembros entre sí.

Europa también debe rechazar la política de división y rechazo promovida por las fuerzas de extrema derecha y antidemocráticas. Los ataques contra las instituciones democráticas, la igualdad, los servicios públicos, el diálogo social, los sistemas de negociación colectiva, los derechos y prerrogativas sindicales no protegerán a las



trabajadoras y trabajadores. Culpar a las personas migrantes, las minorías, los y las desempleadas o las personas LGBTIQ no fortalecerá a Europa. Estas fuerzas buscan desmantelar el modelo social europeo y deben ser firmemente combatidas.

La Confederación Europea de Sindicatos insta a los líderes de la UE a unirse con un propósito renovado y a responder con claridad, unidad y determinación.

En crisis anteriores, Europa ha demostrado que la solidaridad y la acción coordinada pueden proteger a las personas y fortalecer nuestras economías. Así ocurrió durante la pandemia de COVID, cuando Europa creó herramientas innovadoras de inversión y protección del empleo, como NextGenerationEU y SURE.

Ese mismo espíritu se necesita de nuevo con urgencia.

Un acuerdo europeo de inversión y transformación para puestos de trabajo de calidad

Hoy en día, es esencial redoblar los esfuerzos a favor del proyecto europeo mediante la inversión, la solidaridad, la cohesión, normas estrictas y un modelo social sólido. Europa debe avanzar con decisión hacia una economía europea basada en misiones que centre su atención en la creación de empleo de calidad, la producción sostenible, la resiliencia estratégica, la innovación y una transición socialmente justa, de manera que se refuerce la base industrial y otros sectores económicos de Europa, se apoyen los servicios públicos y las infraestructuras de alta calidad y se protejan los derechos y los puestos de trabajo de las y los trabajadores.

Este enfoque basado en misiones debe impulsar la transformación que Europa necesita, incluida la renovación industrial, la transformación digital, la seguridad energética, la transición climática y el desarrollo de servicios públicos e infraestructuras sociales sólidos. Las empresas solo pueden prosperar si el tejido social está intacto y es próspero. Debe basarse en la toma de decisiones democrática y el diálogo social, y debe aportar mejoras tangibles en las condiciones de trabajo y de vida en todas las regiones, entre otras cosas mediante soluciones locales que protejan los ingresos, creen vías de acceso a un empleo de calidad y eviten el declive regional.

Una respuesta europea sólida y una política industrial creíble deben basarse en la inversión, los empleos de calidad, la negociación colectiva, la democracia en el trabajo y el acceso universal a servicios públicos de alta calidad, incluidos la salud y los cuidados de larga duración. La competitividad no es un fin en sí misma y, desde luego, no puede lograrse mediante la desregulación o una carrera a la baja. Por el contrario, la competitividad de Europa debe crecer a partir de una economía basada en el conocimiento y las competencias, construida sobre relaciones laborales justas y el aprendizaje permanente. El marco legislativo europeo es un activo para la productividad, la estabilidad y la equidad.

Los sindicatos han alertado constantemente sobre el daño duradero causado por la falta crónica de inversión, y el informe Draghi ha puesto de manifiesto la necesidad



de que Europa invierta mucho más. Europa necesita ahora un plan de inversión masivo para defender y desarrollar la producción y la innovación sostenibles, garantizar la seguridad energética, apoyar los servicios públicos, garantizar transiciones justas para las transformaciones digital y ecológica, y salvaguardar y crear puestos de trabajo de calidad en todos los sectores y todas las regiones.

Con el fin de NextGenerationEU cada vez más cerca, es aún más urgente establecer herramientas de inversión comunes permanentes, en particular mediante la emisión de bonos comunes denominados en euros, con vistas a desarrollar una capacidad fiscal europea. También es esencial proporcionar a los Estados miembros el margen fiscal necesario para invertir en nuestros objetivos comunes, entre ellos salvaguardar los sistemas de protección social y los servicios públicos y reforzar las infraestructuras sociales. ¡Tenemos que actuar ahora!

Además, el Marco Financiero Plurianual debe garantizar las inversiones necesarias a largo plazo y proactivas en puestos de trabajo de calidad y en el progreso social, medioambiental y económico en todas las regiones, incluidas aquellas que se enfrentan a retos estructurales. Por eso los sindicatos piden un aumento sustancial del próximo presupuesto de la UE en consonancia con las necesidades de inversión conocidas, así como que el Fondo Social Europeo siga siendo un programa independiente, con recursos reservados y un presupuesto superior al actual.

Fabricado en Europa con mano de obra sindicalizada.

Un enfoque «Made in Europe» bien equilibrado y vinculado a puestos de trabajo de calidad debe convertirse en un elemento central de la política industrial europea, incluida la Ley de Aceleración Industrial. «Made in Europe» debe significar algo más que geografía. Debe abarcar todos los sectores y ser una garantía de los valores europeos: salarios justos, derechos sólidos de los trabajadores y trabajadoras, negociación colectiva, sostenibilidad, fiscalidad justa y normas. Debe contribuir a proteger y desarrollar la capacidad productiva y los puestos de trabajo de calidad de Europa, salvaguardando la producción local y reforzando la autonomía estratégica y la resiliencia. Debe asegurar y reforzar las cadenas de valor europeas y aplicarse también a los países de la AELC, los países candidatos y el Reino Unido.

La inversión privada lleva años estancada, incluso cuando los beneficios se disparaban. Por lo tanto, para el movimiento sindical está claro: el apoyo público, las subvenciones y las ayudas estatales nunca deben ser cheques en blanco para las empresas. Las condicionalidades sociales son esenciales y deben incluirse en los distintos componentes del MFP. El dinero público debe promover el empleo de calidad y la negociación colectiva, reforzar la formación, impedir la deslocalización, excluir el dumping social y garantizar que las empresas paguen los impuestos que les corresponden. Estos objetivos revisten gran importancia también con vistas a la revisión de las directivas sobre contratación pública y del marco de ayudas estatales.

El comercio y los aranceles se utilizan cada vez más para socavar las normas y las protecciones, y se ha revertido el progreso en el apoyo al comercio justo y sostenible.



Europa debe mantenerse unida, dispuesta a responder a las presiones externas y decidida a garantizar la igualdad de condiciones a nivel mundial, a elevar los estándares en todo el mundo, en particular los estándares laborales, y a defender la paz, la democracia, la igualdad, la no discriminación y el derecho internacional, en especial a través de las Naciones Unidas y la OIT.

La UE debe defender el modelo social europeo y no debe responder a la competencia mundial ni a las presiones externas diluyendo sus propias protecciones o permitiendo una competencia a la baja —incluso entre sus Estados miembros, los países candidatos y los países vecinos— en materia de salarios y condiciones laborales.

La respuesta de Europa al aislacionismo y al proteccionismo debe ser la solidaridad y la cooperación a escala europea, así como la apertura y el respeto de las normas. En este contexto, es de importancia estratégica estrechar las relaciones y reforzar la asociación entre la UE y el Reino Unido.

Es esencial que la UE desarrolle herramientas de gestión de crisis que puedan activarse rápidamente para proteger el empleo y la producción en sectores estratégicos amenazados, basándose en el modelo del instrumento SURE. La UE también debe abordar las vulnerabilidades y dependencias y garantizar la autonomía estratégica.

La UE también debe rechazar el enfoque de la «fortaleza Europa», en el que se comprometen las libertades personales y los derechos colectivos, se cierran las fronteras y las políticas migratorias ignoran los derechos humanos.

Como unión política, la UE debe contribuir a garantizar la paz, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el progreso social, entre otras cosas mediante políticas de seguridad coordinadas y mejoradas. La UE debe centrarse en un concepto más amplio de seguridad, y la financiación destinada a objetivos sociales debe protegerse para que no se agote a causa de su reasignación a iniciativas de defensa o seguridad, y debería, por el contrario, aumentarse.

La CES reitera su solidaridad con el pueblo ucraniano tras la guerra de agresión ilegal y en curso de Rusia, y pide que se alcance una paz justa y duradera junto con Ucrania.

Pedimos que se promueva una solución justa y viable para Nicosia y Chipre basada en las resoluciones de las Naciones Unidas y los valores y principios de la UE, y que beneficie al pueblo chipriota.

Conseguir la Ley de Empleo de Calidad

Un salario y unas pensiones dignas, contratos seguros, condiciones de seguridad y voz en el trabajo no son privilegios, sino derechos conquistados con esfuerzo y elementos esenciales para la democracia, que contribuyen a una mayor productividad. La UE también debe cumplir su promesa de convergencia social al alza, condición necesaria para hacer realidad el «derecho a permanecer», tal y como propone Enrico Letta. El éxito económico y social de Europa se basa en este



fundamento.

Europa también necesita una demanda interna más fuerte, mediante el refuerzo de la negociación colectiva y el aumento de los salarios, de modo que el aumento de la productividad se traduzca en mejores niveles de vida y un crecimiento sostenible, y que aborde la crisis del coste de la vida.

La CES considera esencial una Ley de Empleo de Calidad ambiciosa y vinculante, como parte de una nueva agenda social para Europa. Debe aplicarse sin demora.

La Ley de Empleo de Calidad no solo tiene por objeto mejorar la vida laboral, sino que también es esencial para alcanzar los objetivos económicos y sociales de Europa. La CES recuerda la evaluación del informe Draghi de que la promoción de la competitividad no debe basarse en «*el uso de la represión salarial para reducir los costes relativos*» y que «*la competitividad actual tiene menos que ver con los costes laborales relativos y más con los conocimientos y las competencias que posee la mano de obra*». La UE no puede lograr una economía competitiva, resiliente y socialmente justa sin empleos de calidad que sean seguros, estén remunerados de manera justa, sean compatibles con la salud y la vida familiar de los y las trabajadoras y garanticen el derecho a la formación.

Es esencial que Europa ofrezca empleo seguro, salarios y condiciones justas, negociación colectiva, igualdad de trato y dignidad en el trabajo, así como anticipación y gestión del cambio. Es urgente abordar el trabajo precario, el trabajo no declarado y el falso autoempleo, así como las prácticas abusivas de subcontratación e intermediación laboral en todos los sectores y todos los países. No se trata de propuestas abstractas, sino de herramientas prácticas para garantizar que la transformación económica de Europa sea también social y se promueva de forma justa y equitativa.

Garantizar la igualdad de género debe ser una prioridad, lo que incluye eliminar las diferencias salariales y de pensiones entre hombres y mujeres, así como la violencia y el acoso en el trabajo. Europa no puede olvidarse de los jóvenes, que sufren tasas de desempleo superiores a la media y, con demasiada frecuencia, se enfrentan a malas condiciones laborales, incluida la injusticia de las prácticas no remuneradas.

La CES insta a la Comisión a que garantice que la Ley de Empleo de Calidad aborde de frente el déficit de empleo de calidad y se convierta en un instrumento concreto para elevar los estándares en toda Europa y crear empleos de calidad en todas las regiones y todos los sectores.

Para lograr el progreso social y la convergencia al alza, son esenciales unas normas mínimas sociales vinculantes y sólidas a nivel de la UE, el diálogo social y la negociación colectiva, los derechos sindicales y de las personas trabajadoras, la información, la consulta y la participación, y la salud y la seguridad en el trabajo. Estas normas mínimas vinculantes no deben socavarse en ningún caso.

Una Europa más fuerte



Los acontecimientos recientes son una advertencia: una democracia fuerte, una paz y una seguridad duraderas son imposibles sin justicia social y sin una economía justa, que valore la igualdad, la redistribución y unos niveles de vida dignos para las personas trabajadoras, los y las jubiladas, las familias y las comunidades.

Los líderes europeos deben trazar un nuevo rumbo basado en la solidaridad que defienda la democracia, refuerce la cohesión social y regional, aborde las desigualdades y la pobreza, fomente la resiliencia ecológica, proteja la negociación colectiva y el diálogo social, y rechace la austeridad y las políticas antidemocráticas.

Una Europa más fuerte significa autonomía estratégica basada en la solidaridad, la inversión, el progreso social y la justicia social, no en la desregulación, la austeridad o el control corporativo.

Pedimos a los líderes europeos que den un salto cualitativo en la inversión para nuestra economía y nuestro futuro europeos comunes, con una estrategia industrial orientada a misiones que cree puestos de trabajo de calidad en todos los sectores y todas las regiones.

Instamos a los líderes europeos a que reconozcan los empleos de calidad, el diálogo social sólido y la negociación colectiva como elementos clave para una economía social de mercado competitiva, resiliente e inclusiva, a que adopten medidas concretas para aumentar la cobertura de la negociación colectiva y a que aprueben una Ley de Empleo de Calidad sólida.

Instamos a los líderes europeos a que avancen hacia una integración europea basada en el progreso social y el refuerzo del desarrollo democrático de las instituciones de la UE, situando los valores democráticos y los derechos sociales en el centro del futuro de Europa.

La CES está dispuesta a trabajar para lograr una Europa más fuerte, que garantice la dignidad, la seguridad y la equidad para todos, y demuestre que Europa puede hacer frente a los retos de hoy y de mañana manteniéndose unida en solidaridad.

La CES y sus organizaciones afiliadas colaborarán con las instituciones de la UE y los Estados miembros, y movilizarán a las trabajadoras y trabajadores de toda Europa, para convertir estas reivindicaciones en mejoras concretas para las personas trabajadoras y sus comunidades.

Traducido por Internacional CEC UGT